

**INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE**

**PROYECTO DE LEY NO. 169 DE 2024 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 80 DE 1993, INCORPORANDO AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LAS ASOCIACIONES CAMPESINAS Y A LOS ORGANISMOS DE LA ACCIÓN COMUNAL DE 1ER Y 2DO GRADO”**

Bogotá D.C., noviembre 12 de 2024

Doctor

**JOSÉ ELIECER SALAZAR LÓPEZ**

Presidente Mesa Directiva

Comisión Cuarta Constitucional Permanente

**H. CÁMARA DE REPRESENTANTES**

Ciudad.

**Asunto:** Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No. 169 de 2024 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993, incorporando al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública a las Asociaciones Campesinas y a los organismos de la Acción Comunal de 1er y 2do. grado”

Respetado Señor Presidente:

Atendiendo la designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de Representantes, nos permitimos presentar Informe de Ponencia para Primer debate del Proyecto de Ley No. 169 de 2024 Cámara “*Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993, incorporando al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a las Asociaciones Campesinas y a los Organismos de la Acción Comunal de 1er y 2do grado*”, en los siguientes términos:

1. **Trámite Y CONTENIDO DEL PROYECTO**

El proyecto, de iniciativa congresional, fue radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes, el día seis (06) de agosto de 2024 y publicado en la Gaceta del Congreso No. 1226 de 2024 Cámara.

Autores los Honorables Representantes: [Juan Pablo Salazar Rivera](https://www.camara.gov.co/representantes/juan-pablo-salazar-rivera), Karen Manrique Olarte, Juan Carlos Vargas Soler, Gerson Montaño Arízala, William Ferney Aljure, Jorge Bastidas Rosero, Gildardo Silva, Jhon Fredi Valencia, Eduard Sarmiento Hidalgo, John Jairo González.

La designación de ponencia se efectuó el día 3 de octubre de 2024, y se concedió prórroga para rendir informe el día 21 de octubre de 2024.

El proyecto de ley consta de cuatro (4) artículos, distribuidos de la siguiente manera:

El artículo 1º: Se refiere al objeto del proyecto de ley.

El artículo 2º: Modifica el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, sobre la capacidad de contratar

El artículo 3º: Adiciona al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los numerales 10 y 11

El artículo 4º: Establece la vigencia y derogatorias de la ley.

**II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY DE CARÁCTER ORDINARIO Y/O COMÙN**

**2.1. Constitución Política**

De acuerdo con el numeral 1º del artículo 150 de la Constitución Política, al Congreso le corresponde hacer las leyes, y por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

*“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:*

 *1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.*

*(,,,)”*

**2.2. Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso)**

El artículo 140 de La Ley 5 de 1992 señala que, los Senadores y Representantes a la Cámara tienen iniciativa legislativa.

El artículo 204 de la Ley 5 señala el procedimiento legislativo ordinario o común para este tipo de iniciativas de ley.

**III. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY**

De acuerdo con los autores “El presente proyecto de ley tiene como propósito modificar la Ley 80 de 1993, incorporando alEstatuto General de Contratación de la Administración Pública a las Asociaciones Campesinas y a los Organismos de la Acción Comunal de 1er y 2do grado, para que puedan celebrar contratos con las entidades estatales, con el fin de que estas organizaciones tengan la oportunidad de mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas de las territorialidades que representan y así dignificar sus vidas, reduciendo de manera paulatina las brechas en ejecución de obras que se presentan.

En consecuencia, el Estado llegaría a las zonas dispersas del país, prestando bienes y servicios, a través de personas que tienen una relación directa con el territorio y sus necesidades reales”.

**IV.** **NECESIDAD Y CONVENIENCIA**

En la exposición de motivos se menciona que “Las comunidades e individuos en Colombia cuentan con una identidad cultural, convertida en un derecho esencial que garantiza que estos puedan ejercer sus derechos, de conformidad con su interacción social, económica, política, cultural, ambiental y territorial.

A partir del año 1991, con la expedición de la Constitución Política Colombiana, la normativa nacional y diferentes sentencias de la Corte Constitucional han desarrollado ampliamente la identidad cultural, exclusiva, de las comunidades étnicas, blindando esta cosmovisión; sin embargo, en este desarrollo normativo no se tenía en cuenta a la población campesina y sus condiciones de vida, sin percatarse que esta población también recurre a prácticas y saberes particulares y sobre todo, ese desarrollo normativo trajo como consecuencia la ampliación de la brecha en el acceso y calidad de sus servicios básicos, empobreciendo el campo, pues según cifras de la Encuesta de Calidad de Vida 2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE[[1]](#footnote-1), el 31,4% de pobreza multidimensional afecta directamente a la población campesina, sin contar además con que ha sido esta población la que ha padecido la crueldad de los impactos del conflicto armado, pues, de acuerdo con un estimativo realizado por 11 organizaciones campesinas, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales - Dejusticia y la Universidad Javeriana, sede Cali, el 58% de las víctimas de violencia sociopolítica y el 63,6% de las víctimas de desplazamiento forzado fueron campesinas, quienes además han debido enfrentar verdaderos patrones de discriminación y de violencia que se crearon o se fortalecieron en el marco del conflicto armado[[2]](#footnote-2).

En ese contexto, el campesinado colombiano luchó en sus territorios para que su voz y sus necesidades fuesen reconocidas y como consecuencia surgió el Acto Legislativo 001 de 2023, donde se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

Por otro lado, se puede observar a las Organizaciones de **acción comunal, especialmente las de primer y segundo grado**, que han venido ejerciendo un rol importante en sus territorios, promoviendo proyectos de índole social y comunitario que afectan de manera positiva sus territorios, sus habitantes y que a hoy, son una figura fuertemente arraigada en estas comunidades; esto conllevó a que se planteara desde el año 2010, la necesidad de que estos organismos sociales tuviesen la oportunidad de ejecutar convenios solidarios con el Estado, sin cerrarle la puerta a ejercer otras modalidades de contratación con los entes de orden nacional, territorial o local, en igualdad de condiciones que otros oferentes.

Empero, bajo disposiciones del Gobierno Nacional, el artículo 15 del Decreto Presidencial No 142 de 2023, se trató de reglamentar el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, con el propósito de que con exclusividad, los organismos de acción comunal pudieran operar convenios solidarios para la ejecución de obras, lo cual el Consejo de Estado suspendió de manera provisional por presunta violación de dos cosas fundamentales (I) igualdad de condiciones con otros oferentes, restringiendo la objetividad como principio rector de la contratación pública (II) la reserva constitucional de ley, al indicar que este Decreto modificaba el mecanismo de selección de los contratistas y que esto solo es competencia del legislador.

Bajo estas premisas, este proyecto de ley, en articulación con la norma actual, pretende suplir de manera real las necesidades de cada comunidad, reconociendo que son las mismas comunidades las que tienen conocimiento de sus falencias y al darles un rol cuidador de su territorio, se mejoraría de manera gradual, pero contundente, dichas falencias, así es que, esta iniciativa legislativa busca incorporar al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a las Asociaciones Campesinas y a los Organismos de la Acción Comunal de 1er y 2do grado, para que tengan la capacidad de celebrar contratos con las entidades estatales de conformidad con las disposiciones vigentes, sin vulnerar los derechos que puedan tener otros oferentes en los procesos contractuales”.

Hacen énfasis los autores que “El acuerdo de paz entre el estado y las FARC amplió considerablemente la inversión en los territorios con el fin de traer desarrollo rural respeto por la vida de la población y desarrollo económico general, pero estos recursos no han llegado a estos territorios excluidos, por el contrario, grandes contratistas se quedan con los recursos de obras que luego se convierten en elefantes blancos”.

**V.** **MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA**

**1. Artículo 64 de la Constitución Política** modificado por el Acto Legislativo 01 Del 05 de julio de 2023 “*Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional*”. Reconoce unas particularidades del campesinado colombiano, a través de su dimensión económica, social, cultural, política y ambiental, así como también la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos.

**2. El artículo 38 de la Constitución Política** garantizó el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, dando paso a los organismos para la acción comunal, la cual desarrolló la Ley 743 de 2002, derogada por la ley 2166 de 2021, la cual desarrolla este artículo, en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones.

**3.** La Ley 80 de 1993 permite el reconocimiento de las particularidades culturales a contratar, por parte grupos poblacionales reconocidos como sujetos de especial protección constitucional en el año 1991, no obstante, al ser el campesinado reconocido recientemente como sujeto de especial protección (2023), se debe ajustar la normativa actual a este nuevo contexto.

**4**. Por otra parte, la Ley 1551 de 2012 “*Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios*”

**Artículo 6°:** El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así:

*Artículo 3°. Funciones de los municipios.*

*Corresponde al municipio*:

(…)

Modifíquese el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así:

(…)

*16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo.*

*17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de manera concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de desarrollo.*

*18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción comunal y otros organismos comunitarios.*

*19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.*

*20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el acompañamiento técnico, acorde con sus competencias.*

*(…)*

*Parágrafo 1°. Las políticas, planes, programas y proyectos con destino al fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades y organizaciones indígenas y de los organismos de acción comunal se formularán en concertación con ellas.*

*Parágrafo 2°. En los parques y zonas verdes públicas entregadas en comodato o en cualquier otra forma de administración a un particular, no se podrá establecer ningún tipo de cobro por acceso al mismo, salvo los casos en donde se realicen espectáculos públicos.*

*Parágrafo 3°. Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades.*

*Parágrafo 4°. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal con el fin de ejecutar obras* ***hasta por la mínima cuantía****. Para la ejecución de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad.*

*Parágrafo 5°. Los denominados convenios solidarios de que trata el parágrafo 3° del presente artículo también podrán ser celebrados entre las entidades del orden nacional y los* **organismos de acción comunal** *para la ejecución de proyectos incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo.*

*El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante los organismos competentes*.

**5**. En esa misma lógica, el título 15 organismos de acción comunal, capítulo 1, convenios solidarios del decreto 1082 de 2015, reglamentó el artículo 95 de la Ley 2166 del 2021, así:

(…)

***Artículo 2.2.15.1.1****. Convenios solidarios. Las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal podrán complementar esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para el desarrollo de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades, mediante la celebración de convenios solidarios en los términos permitidos por el artículo 355 de la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, 1551 de 2012, 2166 de 2021 y/o las normas que las reemplacen o sustituyan.*

***Artículo 2.2.15.1.2.****Convenios solidarios para la ejecución de obras. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, sólo podrán celebrar de manera directa convenios solidarios para la ejecución de obras los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal con los organismos de acción comunal. El valor de tales convenios no podrá exceder la menor cuantía de la entidad estatal involucrada.*

*Estos convenios solidarios solo podrán tener por objeto la ejecución de obras. Para la ejecución de estas obras los Organismos de Acción Comunal deberán procurar vincular a los habitantes de la comunidad.*

***Artículo 2.2.15.1.3****. Convenios solidarios para el desarrollo de programas. En el marco de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, y el parágrafo 2° del artículo 63 de la Ley 2166 de 2021 entidades del orden nacional, departamental, distrital, local y municipal podrán celebrar convenios solidarios con los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas.*

*El objeto de estos convenios solidarios debe estar dirigido al impulso de programas y actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo territoriales o el plan nacional de desarrollo. En consideración a este alcance es necesario que previo al proceso de planeación, selección y contratación, se verifique que el objeto derive de una consagración expresa en el instrumento de planificación de la escala respectiva.*

**6.** No obstante, el artículo 2.2.15.1.2. se encuentra suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, ya que el pasado mes de junio, esta alta instancia consideró que: “***El Presidente se extralimitó en sus funciones porque convirtió en una restricción para contratar lo que se había previsto por la ley como una facultad otorgada a los entes del orden nacional, departamental, distrital y municipal, lo que de paso vulnera la igualdad y la selección objetiva como principios de la contratación estatal.*”**

Esta razón otorgada por el Consejo de Estado lleva a poner sobre las mismas condiciones a los Organismos para la Acción Comunal, las Asociaciones campesinas y demás organismos que trata el artículo No 3 de la Ley 80 de 1993, como igualitarias al momento de querer contratar con el Estado.

**7**. Finalmente, el Decreto 1898 de 2018 “*Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales*” importante para los territorios donde estadísticamente confluyen los campesinos y organizaciones sociales y comunitarias, beneficiarias de este proyecto de Ley, dando razón a una de las problemáticas más grandes que se percibe en la zona Rurales de nuestro país ha sido de tipo logístico, puesto que no existe una infraestructura social robusta en las zonas dispersas del país y esto conlleva a que diferentes gobiernos han aunado esfuerzos para poder solucionar este gran déficit en el territorio.

**8.** Por otro lado, no existe ningún antecedente legislativo, en que el campesinado colombiano pueda tener acceso a la contratación estatal.

**VI. MODIFICACIONES QUE PROPONE EL PROYECTO DE LEY**

Para una mayor compresión de las propuestas, se adjunta un cuadro que contiene las normas actuales y las propuestas del proyecto de ley:

|  |  |
| --- | --- |
| **Artículo 6 de la Ley 80 de 1993 , modificado por el artículo**[**1**](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2160_2021.html#1)**de la Ley 2160 de 2021** | **Artículo 2º del proyecto de ley 169 de 2024** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ARTÍCULO 6o. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR.** (Artículo modificado por el artículo [1](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2160_2021.html#1) de la Ley 2160 de 2021).Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales los Cabildos Indígenas, las asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley [70](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0070_1993.html#INICIO) de 1993.Para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las demás formas y expresiones organizativas, deberán contar con diez (10) años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro; y los consorcios y uniones temporales.Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.**PARÁGRAFO.** Para efectos de la presente ley, la Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Ki'we podrá celebrar contratos para adelantar y ejecutar planes, programas y proyectos para la atención de las necesidades de los habitantes de las comunidades· étnicas de los municipios de Popayán, Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Inzá, Jambaló, La Sierra, La Vega, Miranda, Páez, Patía, Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander de Quilichao, Silvia, Sotará, Suárez, Toribío, Totoró del departamento del Cauca y los municipios de Neiva, Gigante, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Villavieja, Yaguará, Palermo y Rivera del departamento del Huila. | “Artículo 6***.***De la Capacidad para Contratar***.****Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las* disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales los Cabildos Indígenas, las asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993, **organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras,** **las Asociaciones Campesinas y los Organismos de la Acción Comunal de primer y Segundo Grado.**Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.**Parágrafo.** Para efectos de la presente ley, la Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Ki'We; podrá celebrar contratos para adelantar y ejecutar, planes, programas y proyectos para la atención de las necesidades de los habitantes de las comunidades étnicas de los municipios de Popayán, Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Inzá, Jambaló; La Sierra, La Vega, Miranda, Páez, Patía, Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander De Quilichao, Silvia, Sotara, Suárez, Toribio , Totoró del departamento del Cauca y los municipios de Neiva, Gigante, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicel, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Villavieja, Yaguará, Palermo y Rivera del departamento del Huila”.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Artículo 7 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo**[**3**](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2160_2021.html#3)**de la Ley 2160 de 2021)** | **Artículo 3º. Adiciónese al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los numerales 10 y 11, así:** |
| **ARTÍCULO 7o. ENTIDADES A CONTRATAR****1. Cabildo Indígena:** Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.**2. Consejo comunitario de las comunidades negras:** Es la persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.**3. Formas o expresiones organizativas.** Son manifestaciones que, en ejercicio del derecho constitucional de participación, asociación y de la autonomía de conjuntos de familias de ascendencia negra, afrocolombiana, raizal o palenquera que reivindican y promueven su cultura propia, su historia, sus prácticas tradicionales y costumbres, para preservar y proteger la identidad cultural y que estén asentados en un territorio que por su naturaleza no es susceptible de ser titulada de manera colectiva.**4 Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.** Son asociaciones comunitarias integradas por personas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, que reivindican y promueven los derechos étnicos y humanos de estas comunidades.**5. Organizaciones de Segundo Nivel.** Son asociaciones de Consejos Comunitarios, formas y expresiones organizativas y/u organizaciones de base que agrupan a más de dos (2), inscritas en el Registro Único de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, siempre y cuando el área de influencia de la organización de segundo nivel corresponda a más de la tercera parte de los departamentos donde existan comisiones consultivas.**6. Consorcio:** Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.**7. Unión Temporal:** Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.**8. Asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas.**<Numeral modificado por el artículo [354](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2294_2023_pr009.html#354) de la Ley 2294 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> Entidad de derecho público, encargada de fomentar y coordinar con las autoridades locales, regionales y nacionales, la ejecución de programas, planes y proyectos del plan de desarrollo relacionados con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía, la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y/o servicios públicos de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a los lineamientos que al respecto reglamente el Ministerio del Interior y las demás entidades técnicas con competencias relacionadas para su conformación, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley.**9. Consejo Indígena.** <Numeral adicionado por el artículo [354](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2294_2023_pr009.html#354) de la Ley 2294 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> Forma de gobierno indígena, conformados y reglamentados a través de sus usos y costumbres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo [330](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#330) de la Constitución Política.**PARÁGRAFO 1o.** Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.**PARÁGRAFO 2o.** En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en esta ley para los consorcios.**PARÁGRAFO 3o.** Los miembros que hagan parte de los consorcios o uniones temporales no podrán contratar acorde con lo previsto en la presente ley cuando hayan sido sancionados disciplinaria, fiscal o penalmente. | (…)10. **Asociación campesina:** Es aquella organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, constituida o que se constituya por campesinas y/o campesinos en la defensa de sus derechos, la cual ejerce interlocución y participación con el Gobierno Nacional, regional y/o local en materias de políticas públicas, planes y programas relacionados con su económica, su cultura, la protección del ambiente, el ejercicio de sus derechos políticos y materiales, la defensa de los derechos humanos, la reforma agraria, reconociendo los enfoques de género, etario y territorial, el acceso a bienes y derechos como a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, la asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos, entre otras asuntos relacionados con sus formas de vida.11. **Organismos de la acción comunal de primer y segundo grado:** Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunal. a. La **junta de acción comunal** es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.b. La **junta de vivienda comunal** es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. Una vez concluido el programa, la junta de vivienda comunal se podrá asimilar a la Junta de Acción Comunal definida en el presente Artículo, siempre y cuando cumpla los requisitos dispuestos en la ley;c. Es organismo de acción comunal de segundo grado la **asociación de juntas de acción comunal**. Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien. |

**VII. ANÀLISIS SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS**

De acuerdo con lo ordenado en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, en concordancia con los artículos 286 y 291 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), y conforme con el objetivo de la presente iniciativa, se puede concluir inicialmente que, no se evidencian motivos que puedan generar un conflicto de interés en los congresistas para que puedan discutir y votar esta iniciativa de ley, ya que se trata de un proyecto de carácter general que establece medidas generales y no generan beneficios particulares, actuales y directos.

Sin embargo, el conflicto de interés y el impedimento es un tema especial e individual en el que cada congresista debe analizar si puede generarle un conflicto de interés que lo lleve a presentar un impedimento.

**VIII. ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL**

De acuerdo con la ley 819 de 2003 conforme a la cual en todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacerse explícito el impacto fiscal del mismo. se indica que el presente proyecto no genera impacto fiscal, al no ordenar gasto público, dado que al incorporar al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a las Asociaciones Campesinas y a los Organismos de la Acción Comunal de 1er y 2do grado, para que tengan la capacidad de contratar con el Estado, no genera gastos adicionales que no estén contemplados en las funciones de las diferentes instancias del Estado.

Este proyecto de ley al no ordenar gasto público no afecta el marco fiscal de mediano plazo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.

**IX. PROPOSICIÒN**

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a los integrantes de la Honorable Comisión Cuarta Constitucional Permanente, dar primer debate y aprobar el Proyecto de Ley No. 169 de 2024 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993, incorporando al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública a las Asociaciones Campesinas y a los organismos de la Acción Comunal de 1er y 2do. grado”, acogiendo el articulado presentado por los autores.

De los Honorables Representantes, cordialmente,



**JOHN JAIRO GONZÁLEZ AGUDELO**

Representante a la Cámara Curul de Paz No. 3 Antioquia

Ponente Coordinador

****



**GILDARDO SILVA MOLINA**

Representante a la Cámara - Valle del Cauca

Ponente

****

**JAIRO REINALDO CALA SUAREZ**

Representante a la Cámara Santander

Partido Comunes Pacto Histórico

Ponente

**X. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE**

**PROYECTO DE LEY NO. 169 DE 2024 CÀMARA**

 **“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 80 DE 1993, INCORPORANDO AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LAS ASOCIACIONES CAMPESINAS Y A LOS ORGANISMOS DE LA ACCIÓN COMUNAL DE 1ER Y 2DO GRADO”**

**“El Congreso de Colombia,**

**DECRETA”**

**Artículo 1º. Objeto:** La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley 80 de 1993, incorporando alEstatuto General de Contratación de la Administración Pública a las Asociaciones Campesinas y a los Organismos de la Acción Comunal de 1er y 2do grado, para que puedan celebrar contratos con las entidades estatales.

**Artículo 2º. Modifíquese el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:**

“Artículo 6***.***De la Capacidad para Contratar***.****Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las* disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales los Cabildos Indígenas, las asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993, **organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras,** **las Asociaciones Campesinas y los Organismos de la Acción Comunal de primer y Segundo Grado.**

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

**Parágrafo.** Para efectos de la presente ley, la Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Ki'We; podrá celebrar contratos para adelantar y ejecutar, planes, programas y proyectos para la atención de las necesidades de los habitantes de las comunidades étnicas de los municipios de Popayán, Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Inzá, Jambaló; La Sierra, La Vega, Miranda, Páez, Patía, Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander De Quilichao, Silvia, Sotara, Suárez, Toribio , Totoró del departamento del Cauca y los municipios de Neiva, Gigante, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicel, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Villavieja, Yaguará, Palermo y Rivera del departamento del Huila”.

**Artículo 3º. Adiciónese al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los numerales 10 y 11, así:**

(…)

10. **Asociación campesina:** Es aquella organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, constituida o que se constituya por campesinas y/o campesinos en la defensa de sus derechos, la cual ejerce interlocución y participación con el Gobierno Nacional, regional y/o local en materias de políticas públicas, planes y programas relacionados con su económica, su cultura, la protección del ambiente, el ejercicio de sus derechos políticos y materiales, la defensa de los derechos humanos, la reforma agraria, reconociendo los enfoques de género, etario y territorial, el acceso a bienes y derechos como a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, la asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos, entre otras asuntos relacionados con sus formas de vida.

11. **Organismos de la acción comunal de primer y segundo grado:** Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunal.

a. La **junta de acción comunal** es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.

b. La **junta de vivienda comunal** es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. Una vez concluido el programa, la junta de vivienda comunal se podrá asimilar a la Junta de Acción Comunal definida en el presente Artículo, siempre y cuando cumpla los requisitos dispuestos en la ley;

c. Es organismo de acción comunal de segundo grado la **asociación de juntas de acción comunal**. Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien.

**Artículo 4º. Vigencia y derogatorias.** La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones contrarias.

De los Honorables Representantes,



**JOHN JAIRO GONZÁLEZ AGUDELO**

Representante a la Cámara Curul de Paz No. 3 Antioquia

Ponente Coordinador

****



**GILDARDO SILVA MOLINA**

Representante a la Cámara - Valle del Cauca

Ponente

****

**JAIRO REINALDO CALA SUAREZ**

Representante a la Cámara Santander

Partido Comunes Pacto Histórico

Ponente

1. DANE. Encuesta de calidad de vida 2020. Presentado septiembre de 2021. Consultado 20 de septiembre de 2021 en <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/presentacion-rueda-de-prensa-pobreza-multidimensional-20.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA), Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), Mesa Nacional de Unidad Agraria (MUA), Instituto de Estudios Interculturales (IEI), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). “*Guerra contra el campesinado (1958-2019): dinámicas de la violencia y trayectorias de lucha*” (2022). [↑](#footnote-ref-2)